

Santiago, seis de julio de dos mil veintiuno.

Vistos:

Que comparecen los abogados Ciro Colombara López, Aldo Díaz Canales y Carlos Mora Jano, en representación de Fulvio Rossi Ciocca, todos domiciliados en Av. Alonso de Córdova N° 4355, piso 14, comuna de Vitacura, quienes deducen Reclamo de Ilegalidad en contra del Ministerio Público, (en adelante MP), representado por el Consejo de Defensa del Estado, (en adelante CDE), el que actúa representado por su Presidente, don Juan Peribonio Poduje, con domicilio en calle Agustinas N° 1687, comuna de Santiago, por haber el recurrido actuado de forma ilegal y arbitraria al negar al actor el acceso a la información pública que le fuera requerida en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 20.285, solicita que se acoja la presente acción y, en definitiva, ordenar al recurrido hacer entrega del total de la información pública que indica.

Explica que el recurrente fue investigado en calidad de imputado en el marco de la causa RUC 1700831916-2 –que corresponde a una arista del caso SQM, por la supuesta responsabilidad que le cabría en el ilícito previsto en el artículo 97 N° 4 inciso final del Código Tributario.

Indica que por su calidad de Senador, con fecha 22 de septiembre de 2017 el entonces Fiscal Regional de Valparaíso, Sr. Pablo Gómez Niada, solicitó a la Iltrma. Corte de Apelaciones de Santiago, (en adelante ICA Stgo), el desafuero de Rossi, para permitir la formación de causa en su contra como autor de los delitos tributarios reiterados del artículo 97 N° 4 inciso final del Código Tributario, los que se habrían cometido entre el 15 de diciembre de 2008 y el 28 de agosto de 2012, ello a través de la facilitación de 21 documentos tributarios falsos.

Por resolución de 14 de diciembre del año 2017, dicha Corte accedió a lo solicitado dando lugar a la formación de causa.

Apelada tal decisión el 7 de marzo de 2018 la Excma. Corte Suprema, (en adelante CS), revocó lo antes resuelto, rechazando la pretensión del ente persecutor, señalando en lo pertinente que *“[en cuanto a que de los antecedentes reunidos y aportados por el Ministerio Público en estos autos no surge prueba suficiente que permita tener por concurrente en la conducta del imputado el dolo directo de lesionar el patrimonio fiscal, objeto jurídico de la tutela penal contemplado en el tipo delictivo que se le atribuye y que requiere esa intención, pero que no aparece evidenciada en autos.– En efecto, la lectura de los antecedentes reseñados en los fundamentos de la resolución que se*



revisa, especialmente los numerales décimo y undécimo, en medida alguna permite colegir que el imputado conocía y tuvo la voluntad precisa de facilitar documentos tributarios con el objeto de posibilitar la comisión del delito previsto y sancionado en el artículo 97, número 4, inciso primero, del Código del ramo. De hecho, ni siquiera el señor Fiscal Regional requirente llega a enunciarlo puntualmente de ese modo.”.

No obstante lo anterior, en audiencia celebrada con fecha 20 de abril de 2018 en el contexto de la causa RIT 7541-2017 del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, el MP igualmente procedió a la formalización de la investigación a su respecto, imputándole la comisión de los mismos hechos delictivos aducidos para el desafuero.

A raíz de lo anterior, en audiencia de formalización la defensa solicitó el sobreseimiento definitivo de la causa a su respecto, el que fue decretado en virtud de lo dispuesto en el literal a) del artículo 250 del Código Procesal Penal. Tal decisión fue apelada tanto por el MP, como el Servicio de Impuestos Internos, (en adelante SII), y la ICA Stgo. la confirmó. Nueve días después el Fiscal Regional Gómez, comunicó el cierre de la investigación. Con fecha 9 de julio de 2018, se dedujo acusación en la causa RUC 1800604602-5, incluyendo en la misma a Rossi, imputándosele la comisión de idénticos hechos que los atribuidos en la formalización de la investigación y en la solicitud de desafuero que fuera descartada por la Excma. Corte Suprema.

Es por ello que la defensa ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago solicitó su sobreseimiento definitivo, el que fue decretado, sin embargo la ICA Stgo, revocó tal decisión. Por lo anterior, la defensa dedujo acción de amparo, el que fue conocido por la Illtma. Corte de Apelaciones de San Miguel, siendo declarado inadmisibile. Apelada tal resolución, la CS la confirmó, sin perjuicio de lo cual hizo uso de las facultades para obrar de oficio que le confiere el artículo 21 de la Constitución Política de la República, (en adelante CPR), decretando el sobreseimiento definitivo y parcial del recurrente en la causa RIT 4933-2018 del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, señalando que “[d]el mérito de los antecedentes antes narrados, aparece de manifiesto que la persecución penal que pende sobre el amparado es del todo injustificada, en cuanto se le ha impuesto la carga de enfrentar un proceso penal de largo aliento pese a existir un pronunciamiento de este Máximo Tribunal en orden a que los hechos que se



le imputan no son constitutivos de delito, vulnerándose con ello lo preceptuado en el artículo 19 N° 7 de la Constitución Política de la República, infracción de garantías que debe necesariamente ser remediada por esta vía.”

De esta forma, se puso término definitivo a la persecución penal seguida en contra de ROSSI.

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la CPR y artículos 10 y siguientes de la Ley N° 20.285, con fecha 9 de diciembre de 2020 el recurrente ingresó dos solicitudes de acceso a la información pública, dirigidas a la Fiscalía Nacional (en adelante FN), y a la Fiscalía Regional de Valparaíso, (en adelante FRV).

A la FN solicitó: (i) Todas las resoluciones y actos administrativos –indistintamente del soporte en el que consten– dictados durante el período que media entre los años 2015 y 2019 por la Fiscalía Nacional, en el contexto de las causas RUC 1500687796-3, 1600230893-6, 1700081742-2, 1700831916-2 y 1800604602-5 de la Fiscalía Regional de Valparaíso, relativos al Sr. FULVIO ROSSI CIOCCA; (ii) Todas las resoluciones y actos administrativos –indistintamente del soporte en el que consten– dictados durante el período que media entre los años 2015 y 2019, por el Consejo General de Fiscales en relación con las causas RUC 1500687796-3, 1600230893-6, 1700081742-2, 1700831916-2 y 1800604602-5 de la Fiscalía Regional de Valparaíso, relativos al Sr. FULVIO ROSSI CIOCCA; (iii) Todas las comunicaciones –indistintamente del soporte en el que consten– remitidas entre la Fiscalía Regional de Valparaíso (incluyendo en ello las correspondientes al Fiscal Regional, Fiscales Adjuntos, Abogados Asistentes y Abogados Asesores) y la Fiscalía Nacional (incluyendo en ello las correspondientes al Fiscal Nacional, Abogados Asistentes, Abogados Asesores, Directores de Unidades Especializadas y Abogados de Unidades Especializadas), durante el período que media entre los años 2015 y 2019, relativas al Sr. FULVIO ROSSI CIOCCA; (iv) Todos los Informes emanados de la/las Unidades de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional durante el período que media entre los años 2015 y 2019, relativos al Sr. FULVIO ROSSI CIOCCA; y (v) Todos los Informes emanados de las Unidades Especializadas de la Fiscalía Nacional durante el período que media entre los años 2015 y 2019, relativos al Sr. FULVIO ROSSI CIOCCA.

A la FRV solicitó proporcionar: (i) Todas las resoluciones y actos administrativos –indistintamente del soporte en el que consten– dictados durante el período que media entre los años 2015 y 2019 por la Fiscalía



Regional de Valparaíso, en el contexto de las causas RUC 1500687796-3, 1600230893-6, 1700081742-2, 1700831916-2 y 1800604602-5, relativos al Sr. FULVIO ROSSI CIOCCA; (ii) Todas las resoluciones y actos administrativos –indistintamente del soporte en el que consten– dictados durante el período que media entre los años 2015 y 2019 por la Fiscalía Nacional, en el contexto de las causas RUC 1500687796-3, 1600230893-6, 1700081742-2, 1700831916-2 y 1800604602-5 de la Fiscalía Regional de Valparaíso, relativos al Sr. FULVIO ROSSI CIOCCA; (iii) Todas las resoluciones y actos administrativos –indistintamente del soporte en el que consten– dictados durante el período que media entre los años 2015 y 2019, por el Consejo General de Fiscales en relación con las causas RUC 1500687796-3, 1600230893-6, 1700081742-2, 1700831916-2 y 1800604602-5 de la Fiscalía Regional de Valparaíso, relativos al Sr. FULVIO ROSSI CIOCCA; (iv) Todas las comunicaciones –indistintamente del soporte en el que consten– remitidas entre el Fiscal Regional de Valparaíso, los Fiscales Adjuntos, Abogados Asistentes y Abogados Asesores de la Fiscalía Regional de Valparaíso, durante el período que media entre los años 2015 y 2019, relativas al Sr. FULVIO ROSSI CIOCCA; (v) Todas las comunicaciones –indistintamente del soporte en el que consten– remitidas entre la Fiscalía Regional de Valparaíso (incluyendo en ello las correspondientes al Fiscal Regional, Fiscales Adjuntos, Abogados Asistentes y Abogados Asesores) y la Fiscalía Nacional (incluyendo en ello las correspondientes al Fiscal Nacional, Abogados Asistentes, Abogados Asesores, Directores de Unidades Especializadas y Abogados de Unidades Especializadas), durante el período que media entre los años 2015 y 2019, relativas al Sr. FULVIO ROSSI CIOCCA; (vi) Todos los Informes emanados de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Regional de Valparaíso durante el período que media entre los años 2015 y 2019, relativos al Sr. FULVIO ROSSI CIOCCA; Todos los Informes emanados de la/las Unidades de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional, remitidos a la Fiscalía Regional de Valparaíso durante el período que media entre los años 2015 y 2019, relativos al Sr. FULVIO ROSSI CIOCCA; y (viii) Todos los Informes emanados de las Unidades Especializadas de la Fiscalía Nacional, remitidos a la Fiscalía Regional de Valparaíso durante el período que media entre los años 2015 y 2019, relativos al Sr. FULVIO ROSSI CIOCCA.

Sin embargo, el MP se negó infundadamente a la entrega de gran parte de la información solicitada.

Mediante Carta DEN/LT N° 1184/2020 de fecha 31 de diciembre de 2020, doña Francisca Werth Wainer, Directora Ejecutiva Nacional del MP, dio respuesta



parcial a las solicitudes impetradas, justificando la presunta imposibilidad de hacer entrega de los antecedentes restantes por encontrarse comprendidos en las causales de reserva que indica.

Estima que la respuesta es ilegal y arbitraria, contrariando lo dispuesto en los artículos 8 de la CPR, 3, 4, 5, 9, 10, 21 de la Ley N° 20.285 y 8 de la LOCMP. Señala que la Ley Orgánica del MP, consagra la publicidad de los actos y fundamentos del MP, por lo que, los casos de reserva o secreto son excepcionales.

En efecto, la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado tiene justificadas excepciones que contempla la CPR, las que dicen relación con los valores y derechos que la publicidad pudiere afectar, referidas todas ellas explícita y taxativamente en el artículo 8 de la Carta Fundamental y que sólo el legislador de quórum calificado puede configurar.

Por lo tanto, la interpretación de dichas excepciones debe efectuarse restrictivamente, y las mismas deben fundarse únicamente en la circunstancia de que el conocimiento de los actos pueda afectar el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional, causales que no se verifican para el presente caso.

En el presente caso, el MP no hizo entrega del total de información solicitada y disponible, ni justificó su negativa conforme a las causales normativamente previstas.

En primer lugar, tanto la FN, la FRV, y el MP sólo aportaron antecedentes que no entregan ningún tipo de información nueva ni relevante que permita encausar adecuadamente el recabado conocimiento de lo solicitado. Indica que los documentos remitidos dan cuenta de la designación del Fiscal Regional de Valparaíso –cargo ocupado en un inicio por el Sr. Pablo Gómez Niada y luego por la Sra. Claudia Perivancich Hoyuelos– como el persecutor a cargo de la investigación denominada SQM, cuestión que es de público conocimiento, resultando evidente que lo pretendido por el organismo reclamado es acreditar un mero cumplimiento formal del mandato de publicidad que compete a la función pública que ejerce, ya que en definitiva no entregó la totalidad de las resoluciones y actos administrativos dictados en el contexto de las causas que se siguieron en contra del recurrente.

El MP no cumplió a cabalidad con la entrega de la información pública requerida, ni justificó dicho incumplimiento, teniendo a la vista los escasos antecedentes remitidos.



El mero cumplimiento parcial de lo solicitado, pretendiendo omitir la existencia de información adicional disponible sin proporcionar justificación alguna para la negativa, constituye una infracción al principio de transparencia de la función pública, circunstancia que ha sido reconocida como tal por nuestros Tribunales de Justicia. Para tal efecto, cita fallo rol 22.258-2018 de la Excma. Corte Suprema.

Estima improcedente la invocación de la causal de reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 letra a) de la Ley N° 20.285, el que prevé las únicas causales de secreto o reserva de la información que habilitan a denegar total o parcialmente el acceso a la misma una vez solicitada de conformidad a lo dispuesto en el artículo 10 del mismo cuerpo legal, cuyo no es el caso.

Tal norma dispone que son causales de reserva o secreto:

“1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente:

a) Si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales.”

Por su parte, el inciso cuarto del artículo 8 de la LOCMP señala las causales específicas por las que el MP podrá denegar información, indicando al efecto que: *“[...] Con todo, se podrá denegar la entrega de documentos o antecedentes requeridos en virtud de las siguientes causales: la reserva o secreto establecidos en disposiciones legales o reglamentarias; cuando la publicidad impida o entorpezca el debido cumplimiento de las funciones del organismo; la oposición deducida por terceros a quienes se refiera o afecte la información contenida en los documentos requeridos; el que la divulgación o entrega de los documentos o antecedentes requeridos afecte sensiblemente los derechos o intereses de terceras personas, según calificación fundada efectuada por el respectivo Fiscal Regional o, en su caso, el Fiscal Nacional, y el que la publicidad afecte la seguridad de la Nación o el interés nacional. El costo del material empleado para entregar la información será siempre de cargo del requirente, salvo las excepciones legales. La publicidad, divulgación e información de los actos relativos a o relacionados con la investigación, el*



ejercicio de la acción penal pública y la protección de víctimas y testigos, se registrarán por la ley procesal penal.”.

Expresa que de la conjugación de las normas citadas, resulta evidente que ellas buscan resguardar el éxito de una investigación en curso, no pudiendo extenderse el secreto o reserva a casos en que el procedimiento, como tal, haya culminado, como ocurre para el caso del actor. Por lo tanto, no existe investigación, procedimiento, persecución o víctima alguna que deba salvaguardarse atendido que el procedimiento se encuentra indefectiblemente terminado, por lo que difícilmente las labores propias del MP podrían verse afectadas por la remisión de la información solicitada.

Además indica que no se solicitó a la FRV la entrega de documentos que pudieran tener relación con otras investigaciones o imputados diversos. En todo caso, respecto de las aprensiones manifestadas por el MP, resultaría en todo caso aplicable el principio de divisibilidad recogido en el artículo 11 de la Ley N° 20.285, conforme al cual si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causa legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda. De modo que la información requerida no compromete el análisis previo o curso futuro de una indagatoria penal o de una política de persecución seguida por el MP, cuando la misma se limita a una persona en particular, para determinado período de tiempo y dentro del contexto de limitados procedimientos.

El recurrido también se amparó para denegar la información solicitada, en el artículo 19 N° 5 de la CPR. Sin embargo, las comunicaciones cuya entrega solicitó no se encuentran protegidas por esta norma, siendo injustificada su presunta reserva y, con ello, su negativa a proporcionarla.

En efecto, de su tenor literal aparece que tal artículo reconoce la inviolabilidad de las comunicaciones de carácter privado o particular. Lo anterior salta a la vista al interpretarse la referida norma a la luz del artículo 8 de la Constitución Política de la República, ya citado, que consagra la publicidad de los actos de la Administración del Estado.

Por tanto, la invulnerabilidad de las comunicaciones aplica sólo a aquellas de carácter privado, mas no a las sostenidas entre funcionarios públicos a través de sus correos electrónicos institucionales y en materias referentes a sus funciones, que se condicen precisamente con aquellas cuya entrega solicitó esta parte. En apoyo a su postura se remite a fallo rol 1.821-18, de nuestro máximo tribunal.



Idéntico criterio –en cuanto a la publicidad de información que atañe a un desempeño institucional y a funciones que son de carácter público– se ha sostenido por la CS en causa Rol N° 22.258–2018 y por la ltma. Corte de Apelaciones de Santiago en causa Rol N° 5.782–2012.

De modo que considerando que las comunicaciones cuya entrega fue solicitada se limitan a aquellas sostenidas entre funcionarios públicos, a través de medios institucionales, referentes a una investigación particular –ya concluida– en un período de tiempo concreto y únicamente respecto del recurrente, no existe impedimento alguno –más allá de la desidia injustificada de la reclamada– para entregar los documentos en cuestión.

Finaliza pidiendo que se declare que la decisión del MP en orden a negar el acceso a la información solicitada por su parte mediante presentaciones de 9 de diciembre de 2020, constituye un grave atentado contra el principio de transparencia de la función pública (artículos 8 de la CPR y 5 de la Ley N° 20.285) y del derecho de acceso a la información pública de los órganos del Estado (artículos 19 N° 12 de la CPR y 10 de la Ley N° 20.285), procediendo su enmienda conforme a derecho y que se ordene al MP hacer entrega del total de información pública solicitada.

2°.- Que informando el presente reclamo de ilegalidad, Francisca Werth Wainer, Directora Ejecutiva Nacional del Ministerio Público, formuló los descargos y pidió el rechazo de la presente acción.

Indica que mediante Carta DEN/LT N° 1184/2020 de fecha 31 de diciembre de 2020, se dio respuesta al actor, indicándosele que se le adjuntaban las siguientes resoluciones:

“a) Resolución FN/MP N° 2278/2015, de fecha 11 de diciembre de 2015, que designa al Fiscal Regional de Valparaíso, Sr. Pablo Gómez Niada, para dirigir la investigación de la causa RUC N° 1500687796–2, así como cualquier otra investigación en que pudieren aparecer como responsables imputados de la comisión de delitos vinculados a los holding de empresas “PENTA” y “SOQUIMICH”, junto a los fiscales adjuntos Sra. Carmen Gloria Segura Gómez y otros, como apoyo a la investigación referida.

b) Resolución FN/MP N° 2347/2015, de fecha 18 de diciembre de 2015, que delimita competencia entre casos “PENTA” y “SQM”.

c) Resolución FN/MP N° 83/2019, de fecha 11 de enero de 2019, que designa a la Fiscal Regional de Valparaíso, Sra. Claudia Perivancich Hoyuelos,



para dirigir la investigación de los hechos de que tratan las investigaciones RUC N° 1500687796-3, RUC N° 1600230893-6, RUC N° 1600245171-2, RUC N° 1700081742-2, RUC N° 1700831902-2, y RUC N° 1800604602-5, así como cualquiera otra investigación en que pudieren aparecer como responsables imputados de la comisión de delitos vinculados a los holding de empresas "SOQUIMICH" y "PENTA".

d) Resolución FN/MP N° 348/2019, de fecha 01 de marzo de 2019, que designa a la Fiscal Regional de Valparaíso, Sra. Claudia Perivancich Hoyuelos, para dirigir la investigación RUC N° 1700831916-2.

e) Resolución FN/MP N°166/2016, de fecha 27 de enero de 2016, que destina a la fiscal adjunta, Sra. Paola Castiglione González, a la Fiscalía Regional de Valparaíso.

f) Resolución URH N°1932/2017, de fecha 17 de julio de 2017, de la Fiscal Regional de Valparaíso, que encomienda comisión de servicios al fiscal adjunto Sr. Rolando Ramírez Arredondo, para cumplir funciones de apoyo en la investigación relacionada con la empresa SQM.

g) Resolución URH N° 557/2019, de fecha 15 de marzo de 2019, de la Fiscal Regional de Valparaíso, que encomienda comisión de servicios al fiscal adjunto Sr. Rolando Ramírez Arredondo, para cooperar en actuaciones, estudios y labores previas a realizar y eventualmente en la propia audiencia de preparación de juicio oral en la causa RUC 1800604602-5 y las restantes relacionadas.

En cuanto al resto de lo solicitado, se negó el acceso por lo siguiente:

Respecto, del requerimiento de todas las resoluciones y actos administrativos indistintamente del soporte en el que consten, para el período y causas indicadas por el Consejo General de Fiscales, (en adelante CGF), se le precisó que desde el punto de vista formal, no se cuenta con resoluciones dictadas por el CGF y que en cuanto al fondo si lo requerido son las actas del Consejo General, éstas corresponden a documentación reservada, pues dan cuenta de antecedentes, análisis, discusiones o deliberaciones previas a la adopción de resoluciones, medidas o políticas, en el seno del órgano consultivo superior del Ministerio Público, el que está dotado del privilegio deliberativo que



corresponde a toda autoridad superior de una Institución en el proceso de toma de decisiones. Cabe consignar que muchas veces dichas discusiones o análisis de los temas no se materializan en actos concretos. En consecuencia, las actas de las sesiones del Consejo General se encuentran protegidas por la causal de secreto o reserva que establece el artículo 8° inciso cuarto de la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, causal de reserva que encuentra su correlato en la causal de reserva legal establecida en iguales términos en la Ley 20.285, artículo 21 N° 1.

En cuanto, a la solicitud de todas las comunicaciones indistintamente del soporte en el que consten, en relación al período y causas indicadas en la FN y FRV, se señaló que los correos electrónicos son reservados, de conformidad a la garantía constitucional del artículo 19 N° 5 de la Constitución, lo que se encuentra resuelto de forma consistente por el Tribunal Constitucional, en diversas sentencias dictadas en esta materia.

Cabe tener en consideración que los correos electrónicos de fiscales y funcionarios del Ministerio Público no constituyen información pública, sino que son una herramienta comunicacional de trabajo interno que se pone a disposición del personal de la Fiscalía de Chile para el desarrollo de sus labores institucionales, cuyas comunicaciones a través de este medio, se encuentran protegidas por la garantía constitucional del artículo 19 N° 5 de la Carta Fundamental, que establece la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada.

Las comunicaciones electrónicas de todo funcionario público constituyen un insumo inestimable para la toma de decisiones, análisis de casos, intercambio de ideas, todo lo cual debe fluir libremente, sin injerencia de terceros y con la razonable expectativa de privacidad que el ordenamiento jurídico establece respecto de las comunicaciones.

Eventualmente, al publicitar esos correos electrónicos, se podría afectar el debido cumplimiento de las funciones institucionales, en tanto órgano persecutor penal del país, a cargo de la investigación y persecución de crímenes y simples delitos, materia que – por mandato legal – debe estar exenta del público conocimiento, al tenor de lo señalado en el artículo 21 N° 1 letra a) de la Ley N° 20.285.

A mayor abundamiento, esta causal de reserva también se encuentra contenida en el artículo 8 inciso cuarto de la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, que establece que se podrá denegar la información *“cuando la publicidad impida o entorpezca el debido cumplimiento*



de las funciones del organismo”, lo que, tratándose del Ministerio Público, son las funciones de investigación, persecución penal y protección a víctimas y testigos, a la luz de lo dispuesto en los artículos 83 de la Constitución Política de la República y 1° de la Ley N°19.640.

Finalmente, en cuanto a la solicitud de todos los informes emanados de las Unidades Especializadas y Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional y Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Regional de Valparaíso, en relación al periodo y causas indicadas, se precisó que la reserva de los informes requeridos también se sustenta en las disposiciones legales y fundamentos expuestos en los literales precedentes, esto es, principalmente, en el artículo 8 inciso cuarto de la Ley N° 19.640, y en el artículo 21 N° 1 letra a) de la Ley N° 20.285.

Excepción de litis pendencia.

Indica la recurrida que en autos rol 17.801-2020 del 19° Juzgado Civil de Santiago, los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz, actuando en representación de Fulvio Rossi Ciocca solicitaron la medida prejudicial de exhibición de documentos en contra del MP, representado por el CDE.

Como puede apreciarse a través de una gestión prejudicial se solicitó al tribunal la exhibición de los mismos documentos que intenta obtener por esta vía directamente al MP.

En la gestión judicial referida, el MP exhibió idénticos documentos que le fueron entregados al solicitante en respuesta a su solicitud de transparencia. Y se argumentó para no exhibir los otros documentos pretendidos, lo mismo que en esta ocasión.

El futuro demandante, contravirtió la argumentación del CDE y solicitó que se aperciba al MP, sin perjuicio de ordenarle la exhibición de los documentos que estima se habrían omitido injustificadamente.

El Tribunal dio traslado a la petición, se recibió a prueba, y por encontrarse los plazos suspendidos en razón de la pandemia, ella no se ha rendido y no ha habido un pronunciamiento definitivo sobre lo solicitado.

De la simple revisión de lo discutido ante el 19° Juzgado Civil, y el tenor del reclamo de ilegalidad interpuesto ante SS. Itma, se evidencia que se trata de lo mismo, es decir la procedencia de exigir al MP que ponga a disposición del Sr. Rossi Ciocca, determinados documentos.

En cuanto al fondo

A.- En relación al primer punto de lo solicitado, Resoluciones y actos administrativos indistintamente del soporte en el que consten dictados durante el período que media entre los años 2015 y 2019 por la Fiscalía Nacional y



Fiscalía Regional de Valparaíso, en el contexto de las causas RUC 1500687796-3, 1600230893-6, 1700081742-2, 1700831916-2 y 1800604602-5 de la Fiscalía Regional de Valparaíso, relativos al Sr. Fulvio Rossi Ciocca; se adjuntaron mediante Carta DEN/LT N° 1184/2020, las Resoluciones singularizadas en la Carta mencionada con la respectiva explicación del objeto de cada una, explica que lo entregado al reclamante son Resoluciones del Fiscal Nacional y Resoluciones de los Fiscales Regionales de la Región de Valparaíso, a cargo de investigaciones solicitadas en el tiempo referido, por lo que no es efectivo que haya dado cumplimiento solo formal del mandato de publicidad que compete a la función pública, sin entregar la totalidad de las resoluciones y actos administrativos dictados en el contexto de las causas ya singularizadas.

Agrega que la falta de especificación de la petición impide contrastar las afirmaciones del reclamante, en este caso, se piden resoluciones dictadas en relación a la investigación dirigida en contra del actor, y tales documentos constan en la carpeta de investigación, de la que está en conocimiento aquél.

B.- En relación a la solicitud de todas las Resoluciones y actos administrativos indistintamente del soporte en el que consten dictados durante el período que media entre los años 2015 y 2019, por el Consejo General de Fiscales (en adelante el Consejo), en relación a las causas RUC 1500687796-3, 1600230893-6, 1700081742-2, 1700831916-2 y 1800604602-5 de la Fiscalía Regional de Valparaíso, relativos al Sr. Fulvio Rossi Ciocca.

Hace presente que de acuerdo al artículo 25 de la Ley N° 19.640, Orgánica del Ministerio Público, *“el Consejo General está integrado por el Fiscal Nacional y los Fiscales Regionales, órgano al cual le corresponde de conformidad a lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, lo siguiente: a) Dar a conocer su opinión respecto de los criterios de actuación del Ministerio Público, cuando el Fiscal Nacional lo requiera de conformidad a lo dispuesto en la letra a) del artículo 17; b) Oír las opiniones relativas al funcionamiento del Ministerio Público que formulen sus integrantes; c) Asesorar al Fiscal Nacional en las otras materias que éste solicite, y d) Cumplir las demás funciones que ésta u otra ley orgánica constitucional le asignen”*.

El Consejo sesiona ordinariamente al menos cuatro veces al año y extraordinariamente, cuando lo convoque el FN, los temas que se abordan en sus sesiones son complejos y reservados y suelen estar relacionados con



criterios de actuación del FN, tales como definiciones de políticas públicas de carácter institucional, información sobre investigaciones penales relevantes, designación de un Fiscal Regional investigador cuando se haya recibido una denuncia penal en contra de otro Fiscal Regional para efectos de iniciar una investigación penal, analizar la información que entreguen las Unidades Especializadas, adopción de medidas de seguridad para fiscales, entre otras materias sensibles.

Como órgano consultivo, lo que allí se debate no necesariamente se materializa en actos o resoluciones, que son los instrumentos que en definitiva están revestidos de los principios de publicidad y transparencia, conforme a lo dispuesto en la Constitución y en la Ley.

En tal sentido, las actas sólo corresponden a documentación interna; no constituyendo actos ni resoluciones del Ministerio Público. No obstante lo cual, cuando con ocasión de lo debatido en dichas sesiones se adoptan decisiones que deban materializarse en actos administrativos o en resoluciones, éstas se han entregado cuando así se han solicitado.

Por lo tanto, desde el punto de vista de lo formal, no se cuenta con resoluciones dictadas por el CGF.

Si lo que se requiere son las actas del Consejo, se precisó que corresponden a documentación reservada, pues dan cuenta de antecedentes, análisis, discusiones o deliberaciones previas a la adopción de resoluciones, medidas o políticas, en el seno del órgano consultivo superior del Ministerio Público, el que está dotado del privilegio deliberativo que corresponde a toda autoridad superior de una Institución en el proceso de toma de decisiones.

Cabe consignar que muchas veces dichas discusiones o análisis de los temas no se materializan en actos concretos. En consecuencia, las actas de las sesiones del Consejo General se encuentran protegidas por la causal de secreto o reserva que establece el artículo 8° inciso cuarto de la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, que señala que se podrá denegar la información *“cuando la publicidad impida o entorpezca el debido cumplimiento de las funciones del organismo”*, lo que, tratándose del Ministerio Público, son las funciones de investigación, persecución penal y protección a víctimas y testigos, a la luz de lo dispuesto en el artículo 83 de la Carta Fundamental y artículo 1° de la Ley N° 19.640, causal de reserva que encuentra su correlato en la causal de reserva legal establecida en iguales términos en la Ley N° 20.285, artículo 21 numeral 1.



En definitiva, en las sesiones del Consejo, lo que se debate corresponde al ejercicio deliberativo propio de las máximas autoridades de la Institución, lo que también está sujeto a protección y tutela por parte del ordenamiento jurídico. Ello, por cuanto la publicidad no es un principio absoluto, ya que al momento de resolver sobre una petición de información deben analizarse también otros bienes jurídicos comprometidos en cada caso, efectuar la ponderación de principios y derechos que corresponda, y conforme a ella, adoptar la decisión final.

Tal razonamiento así por lo demás ha sido recogido por la jurisprudencia de los Tribunales.

La propia ICA Stgo., en fallo de fecha 27 de enero de 2021, causa rol N° 626-2020, a propósito de una solicitud de acceso a la información, presentada por don Claudio Uribe Hernández, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, en que requirió acta íntegra del Consejo, tal petición fue denegada por las mismas razones para no acceder a lo pedido por el actor. Cita los argumentos contenidos en la sentencia recaída en tal causa.

Por su parte, la CS ha establecido causal de reserva respecto de las actas de las sesiones del CDE, en fallo de 28 de noviembre de 2012, causa rol N° 2788-2012. También, cita jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

De la recopilación de los citados fallo se desprende que no toda información que obre en poder de los órganos del Estado es pública y, en el caso que nos ocupa, las actas del Consejo no constituyen actos ni resoluciones, sino que corresponden a documentos internos que dan cuenta del análisis y discusión de diversos temas propios del órgano superior del Ministerio Público, de carácter consultivo, haciendo presente que cuando en dichos Consejos se han adoptado decisiones que deben hacerse efectivas a través de actos o resoluciones, dichos actos o resoluciones –si no están sujetos a causal de reserva legal– se han entregado cuando se han solicitado, por estar revestidos del principio de publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado.

En el ámbito estatutario de fiscales y funcionarios del MP, éstos deben apegarse en su actuación no sólo a las normas de la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, y a lo que mandata la Constitución, sino que también a los Reglamento dictados de conformidad a la Ley, entre cuyas obligaciones se establecen las siguientes:

- Reglamento de Personal para los Funcionarios del Ministerio Público:



Artículo 33 N° 9: *“Guardar secreto de la información de que tome conocimiento por razones de su cargo, la que no puede revelar a terceros sino en virtud de un requerimiento legal o judicial, o con autorización previa del jefe respectivo;”*

– Reglamento de Personal para los Fiscales del Ministerio Público:

Artículo 37 N° 14: *“Guardar secreto de la información de que tome conocimiento por razones de su cargo, la que no puede revelar a terceros sino en virtud de un requerimiento legal o judicial, o con autorización previa del jefe respectivo;”*

Respecto a la petición de las “resoluciones y actos administrativos” dictados durante el período que media entre los años 2015 y 2019, por el Consejo General de Fiscales, cabe reiterar que dicho órgano no dicta actos administrativos o resoluciones.

En relación a la solicitud, de todas las comunicaciones indistintamente del soporte en el que consten– remitidas entre la FRV (incluyendo en ello las correspondientes al Fiscal Regional, fiscales adjuntos, abogados asistentes y abogados asesores) y la FN (incluyendo en ello las correspondientes al Fiscal Nacional, abogados asistentes, abogados asesores, directores de Unidades Especializadas y abogados de Unidades Especializadas), durante el período que media entre los años 2015 y 2019, relativas al recurrente para las causas en cuestión, precisa que los correos electrónicos son reservados, de conformidad a la garantía del artículo 19 N° 5 de nuestra Carga Magna.

Hace presente que los correos electrónicos de fiscales y funcionarios del Ministerio Público no constituyen información pública, sino que constituyen una herramienta comunicacional de trabajo interno que se pone a disposición del personal de la Fiscalía de Chile para el desarrollo de sus labores institucionales, cuyas comunicaciones a través de este medio, se encuentran protegidas por la garantía constitucional del artículo 19 N° 5 de nuestra Carta Fundamental, que establece la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada.

Sobre el particular cita jurisprudencia en apoyo a su defensa, causas N° 288–2020, 7369–2012, 6704–2011 y 2496–2012 de la ICA Stgo., y rol 4380–12 de la CS.

En definitiva, concluye que las comunicaciones electrónicas de todo funcionario público constituyen un insumo inestimable para la toma de decisiones, análisis de casos, intercambio de ideas, todo lo cual debe fluir



libremente, sin injerencia de terceros y con la razonable expectativa de privacidad que nuestro ordenamiento jurídico establece respecto de las comunicaciones. Si se publicitaran o exhibieran esos correos electrónicos, se difundirían las comunicaciones de fiscales del MP, lo que no está previsto por la ley, y, eventualmente, al publicitar esos correos electrónicos, se podría afectar el debido cumplimiento de las funciones institucionales, en tanto órgano persecutor penal del país, a cargo de la investigación y persecución de crímenes y simples delitos, materia que – por mandato legal – debe estar exenta del público conocimiento, al tenor de lo señalado en el artículo 21 N° 1 letra a) de la Ley N° 20.285, que establece una causal de reserva amplia, pues se refiere no sólo a que la publicidad vaya en desmedro de la investigación, sino que a cualquier antecedente relativo a la defensa jurídica y judicial de la investigación, entendiendo incorporado en aquello, entre otros, los informes jurídicos, estrategias procesales, criterios de actuación y análisis de casos.

A mayor abundamiento, la causal de reserva también se encuentra contenida en el artículo 8 inciso cuarto de la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, que establece que se podrá denegar la información “cuando la publicidad impida o entorpezca el debido cumplimiento de las funciones del organismo”, lo que, tratándose del MP, son las funciones de investigación, persecución penal y protección a víctimas y testigos, a la luz de lo dispuesto en el artículo 83 de la CPR y artículo 1° de la Ley N° 19.640.

Distinta es la situación si esos correos electrónicos ya están incorporados en la carpeta de investigación penal y forman parte de ella, por cuanto en ese caso los intervinientes sí tienen derecho a solicitar copia de los antecedentes de la investigación, conforme a las reglas del Código Procesal Penal, artículo 12 en relación al artículo 182.

Finalmente, en cuanto a la solicitud de todos los Informes emanados de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Regional de Valparaíso durante el período que media entre los años 2015 y 2019, relativos al Sr. Fulvio Rossi Ciocca, así como todos los Informes emanados de la/las Unidades de Asesoría Jurídica y Unidades Especializadas de la Fiscalía Nacional, para el período y las causas que indica; se le precisó en la carta respuesta, que la reserva de los informes requeridos también se sustenta en las disposiciones legales y fundamentos expuestos, principalmente, en el artículo 8 inciso cuarto de la Ley N° 19.640, y en el artículo 21 N° 1 letra a) de la Ley N° 20.285.

Si se publicitaran esos informes, se difundirían los análisis y estrategias de persecución en casos concretos que se han investigado, lo cual podría permitir la



anticipación de los criterios de persecución por parte de la Fiscalía de Chile, afectando no sólo a estrategias y cursos de acción de casos pasados, sino que también de venideras investigaciones.

Lo anterior, se encuentra además en concordancia a la instrucción impartida por el Fiscal Nacional en el Oficio FN N° 060/2014, de fecha 23 de enero de 2014, en el cual instruye, a propósito del registro de la investigación, que: *“Los fiscales evitarán y, por lo mismo, no están obligados a dar copia a los intervinientes, de aquella documentación consistente en comunicaciones entre el fiscal y sus superiores jerárquicos, pares o personal colaborador, así como todo antecedente de carácter epistolar que dé cuenta de actuaciones, opiniones o instrucciones de carácter administrativo. En tal sentido, se instruye específicamente no incluir copia de tales comunicaciones y, sobretodo, de los informes jurídicos provenientes de las Unidades Especializadas o Unidades de Asesoría Jurídica (regionales o Nacional) en las respectivas carpetas de investigación.”*

La reserva dice relación con las comunicaciones, informes, deliberaciones, opiniones, estrategias y sugerencias que nunca formaron parte de dichas causas criminales, por cuanto efectivamente constituyen insumos internos, para así permitirles a los persecutores a cargo, el poder contar con todos los antecedentes necesarios para sostener la acción penal en los tribunales que debían conocer del asunto en cuestión, lo cual, en ningún caso, quiere decir que una vez tomada la decisión, el imputado esté en desconocimiento de los fundamentos que la sustentan, ya que toda decisión persecutoria que se adopte a su respecto es debidamente comunicada ante el tribunal respectivo.

Sobre el particular, también cita como jurisprudencia las causas rol 466-2020 y 1037-17 de la ICA Stgo.

Por tales razones, pide desestimar el reclamo de ilegalidad de autos.

En cuanto a la forma.

3°.- Que en cuanto a la excepción de litis pendencia alegada por el MP, y que la hace consistir que en causa rol 17.801-2020 del 19° Juzgado Civil de Santiago, el recurrente solicitó como medida prejudicial la exhibición de los mismos documentos que por esta vía pidió directamente al recurrido, al amparo de la Ley 20.285.



Hace presente que en dicha gestión judicial, el MP exhibió los mismos documentos que le fueron entregados al solicitante en respuesta a su solicitud de transparencia.

Pide que para evitar decisiones contradictorias de dos tribunales, se rechace el presente reclamo de ilegalidad.

4°.- Que teniendo en consideración que el procedimiento de reclamo establecido en el artículo noveno transitorio de la Ley 20.285, tiene por finalidad resolver sobre la solicitud de información pedida por el interesado, en este caso, al Ministerio Público, cuando este órgano no se pronuncia sobre una petición de información, o cuando ésta haya sido denegada total o parcialmente, estableciéndose un procedimiento acotado; por lo que no resulta procedente aceptar la excepción dilatoria de litis pendencia opuesta por la recurrida, que persigue corregir vicios formales en juicios de lato conocimiento, cuyo no es el caso de autos.

En cuanto al fondo.

5°.- Que las solicitudes de acceso a la información pública, formuladas por el actor a la Fiscalía Nacional, son las siguientes:

A.- Todas las resoluciones y actos administrativos –indistintamente del soporte en el que consten– dictados durante el período que media entre los años 2015 y 2019 por la Fiscalía Nacional, en el contexto de las causas RUC 1500687796-3, 1600230893-6, 1700081742-2, 1700831916-2 y 1800604602-5 de la Fiscalía Regional de Valparaíso, relativos al Sr. FULVIO ROSSI CIOCCA;

B.- Todas las resoluciones y actos administrativos –indistintamente del soporte en el que consten– dictados durante el período que media entre los años 2015 y 2019, por el Consejo General de Fiscales en relación con las causas RUC 1500687796-3, 1600230893-6, 1700081742-2, 1700831916-2 y 1800604602-5 de la Fiscalía Regional de Valparaíso, relativos al Sr. FULVIO ROSSI CIOCCA;

C.- Todas las comunicaciones –indistintamente del soporte en el que consten– remitidas entre la Fiscalía Regional de Valparaíso (incluyendo en ello las correspondientes al Fiscal Regional, Fiscales Adjuntos, Abogados Asistentes y Abogados Asesores) y la Fiscalía Nacional (incluyendo en ello las correspondientes al Fiscal Nacional, Abogados Asistentes, Abogados Asesores, Directores de Unidades Especializadas y Abogados de Unidades Especializadas), durante el período que media entre los años 2015 y 2019, relativas al Sr. FULVIO ROSSI CIOCCA;



D.– Todos los Informes emanados de la/las Unidades de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional durante el período que media entre los años 2015 y 2019, relativos al Sr. FULVIO ROSSI CIOCCA; y

E.– Todos los Informes emanados de las Unidades Especializadas de la Fiscalía Nacional durante el período que media entre los años 2015 y 2019, relativos al Sr. FULVIO ROSSI CIOCCA.

6º.– Que las solicitudes de acceso a la información pública, formuladas por el actor a la Fiscalía Regional de Valparaíso, son las siguientes:

A.– Todas las resoluciones y actos administrativos –indistintamente del soporte en el que consten– dictados durante el período que media entre los años 2015 y 2019 por la Fiscalía Regional de Valparaíso, en el contexto de las causas RUC 1500687796–3, 1600230893–6, 1700081742–2, 1700831916–2 y 1800604602–5, relativos al Sr. FULVIO ROSSI CIOCCA.

B.– Todas las resoluciones y actos administrativos –indistintamente del soporte en el que consten– dictados durante el período que media entre los años 2015 y 2019 por la Fiscalía Nacional, en el contexto de las causas RUC 1500687796–3, 1600230893–6, 1700081742–2, 1700831916–2 y 1800604602–5 de la Fiscalía Regional de Valparaíso, relativos al Sr. FULVIO ROSSI CIOCCA.

C.– Todas las resoluciones y actos administrativos –indistintamente del soporte en el que consten– dictados durante el período que media entre los años 2015 y 2019, por el Consejo General de Fiscales en relación con las causas RUC 1500687796–3, 1600230893–6, 1700081742–2, 1700831916–2 y 1800604602–5 de la Fiscalía Regional de Valparaíso, relativos al Sr. FULVIO ROSSI CIOCCA.

D.– Todas las comunicaciones –indistintamente del soporte en el que consten– remitidas entre el Fiscal Regional de Valparaíso, los Fiscales Adjuntos, Abogados Asistentes y Abogados Asesores de la Fiscalía Regional de Valparaíso, durante el período que media entre los años 2015 y 2019, relativas al Sr. FULVIO ROSSI CIOCCA.

E.– Todas las comunicaciones –indistintamente del soporte en el que consten– remitidas entre la Fiscalía Regional de Valparaíso (incluyendo en ello las correspondientes al Fiscal Regional, Fiscales Adjuntos, Abogados Asistentes y Abogados Asesores) y la Fiscalía Nacional (incluyendo en ello las correspondientes al Fiscal Nacional, Abogados Asistentes, Abogados Asesores, Directores de Unidades Especializadas y Abogados de Unidades Especializadas),

TNTVJXXRYX



durante el período que media entre los años 2015 y 2019, relativas al Sr. FULVIO ROSSI CIOCCA.

F.– Todos los Informes emanados de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Regional de Valparaíso durante el período que media entre los años 2015 y 2019, relativos al Sr. FULVIO ROSSI CIOCCA.

G.– Todos los Informes emanados de la/las Unidades de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional, remitidos a la Fiscalía Regional de Valparaíso durante el período que media entre los años 2015 y 2019, relativos al Sr. FULVIO ROSSI CIOCCA.

H.– Todos los Informes emanados de las Unidades Especializadas de la Fiscalía Nacional, remitidos a la Fiscalía Regional de Valparaíso durante el período que media entre los años 2015 y 2019, relativos al Sr. FULVIO ROSSI CIOCCA.

7º.– Que el recurrido sólo entregó al requirente la siguiente información:

a) Resolución FN/MP N° 2278/2015, de fecha 11 de diciembre de 2015, que designa al Fiscal Regional de Valparaíso, Sr. Pablo Gómez Niada, para dirigir la investigación de la causa RUC N° 1500687796-2, así como cualquier otra investigación en que pudieren aparecer como responsables imputados de la comisión de delitos vinculados a los holdings de empresas “PENTA” y “SOQUIMICH”, junto a los fiscales adjuntos Sra. Carmen Gloria Segura Gómez y otros, como apoyo a la investigación referida.

b) Resolución FN/MP N°2347/2015, de fecha 18 de diciembre de 2015, que delimita competencia entre casos “PENTA” y “SQM”.

c) Resolución FN/MP N° 83/2019, de fecha 11 de enero de 2019, que designa a la Fiscal Regional de Valparaíso, Sra. Claudia Perivancich Hoyuelos, para dirigir la investigación de los hechos de que tratan las investigaciones RUC N° 1500687796-3, RUC N° 1600230893-6, RUC N° 1600245171-2, RUC N° 1700081742-2, RUC N° 1700831902-2, y RUC N° 1800604602-5, así como cualquiera otra investigación en que pudieren aparecer como responsables imputados de la comisión de delitos vinculados a los holding de empresas “SOQUIMICH” y “PENTA”.

d) Resolución FN/MP N° 348/2019, de fecha 01 de marzo de 2019, que designa a la Fiscal Regional de Valparaíso, Sra. Claudia Perivancich Hoyuelos, para dirigir la investigación RUC N° 1700831916-2.

e) Resolución FN/MP N°166/2016, de fecha 27 de enero de 2016, que destina a la fiscal adjunta, Sra. Paola Castiglione González, a la Fiscalía Regional de Valparaíso.



f) Resolución URH N°1932/2017, de fecha 17 de julio de 2017, de la Fiscal Regional de Valparaíso, que encomienda comisión de servicios al fiscal adjunto Sr. Rolando Ramírez Arredondo, para cumplir funciones de apoyo en la investigación relacionada con la empresa SQM.

g) Resolución URH N° 557/2019, de fecha 15 de marzo de 2019, de la Fiscal Regional de Valparaíso, que encomienda comisión de servicios al fiscal adjunto Sr. Rolando Ramírez Arredondo, para cooperar en actuaciones, estudios y labores previas a realizar y eventualmente en la propia audiencia de preparación de juicio oral en la causa RUC 1800604602-5 y las restantes relacionadas.

8°.- Que para una acertada resolución de la presente acción, conviene tener presente las siguientes disposiciones legales:

A.- Artículo 8, inciso cuarto, de la Ley 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público: “Son públicos los actos administrativos del Ministerio Público y los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial. Con todo, se podrá denegar la entrega de documentos o antecedentes requeridos en virtud de las siguientes causales: la reserva o secreto establecidos en disposiciones legales o reglamentarias; cuando la publicidad impida o entorpezca el debido cumplimiento de las funciones del organismo; la oposición deducida por terceros a quienes se refiera o afecte la información contenida en los documentos requeridos; el que la divulgación o entrega de los documentos o antecedentes requeridos afecte sensiblemente los derechos o intereses de terceras personas, según calificación fundada efectuada por el respectivo Fiscal Regional o, en su caso, el Fiscal Nacional, y el que la publicidad afecte la seguridad de la Nación o el interés nacional. El costo del material empleado para entregar la información será siempre de cargo del requirente, salvo las excepciones legales.”.

B.- Artículo 5°, inciso primero, de la Ley 20.285. “En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado.”.

C.- Artículo 21 N° 1 de la Ley 20.285. “Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes:



1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente:

a) Si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales.

b) Tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas.

c) Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.”.

D.- Artículo 19 N° 5 de la Constitución Política de la República: La Constitución asegura a todas las personas:(...) N° 5 La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. El hogar sólo puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas determinados por la ley;”.

9°.- Que en cuanto a las resoluciones y actos administrativos solicitados por el actor a los recurridos, referidos en los motivos 5° y 6° precedentes, emanados del CGF, hay que tener presente que las Actas de este órgano, tienen el carácter de información reservada, al tenor de lo dispuesto por el artículo 8, inciso cuarto de la Ley 19.640, (Orgánica del MP), ya que se refieren a antecedentes e información que sirve de fundamento a las políticas y decisiones adoptadas por el órgano consultivo superior del MP. Tal precepto permite a éste, invocar una causal de reserva para denegar su información, cuando su publicidad impida o entorpezca el debido cumplimiento de las funciones del organismo, esto es, las de investigación, persecución penal y protección a víctimas y testigos. De esta manera, al tenor de lo preceptuado, además, por el artículo 21 de la Ley N° 20.285 referido precedentemente, lo pretendido por el recurrente constituye causal de secreto, en cuya virtud puede denegarse el acceso a la información, ante el riesgo de afectarse bienes jurídicos protegidos por las normas antes reseñadas, que se refieren específicamente el debido cumplimiento de las funciones del Consejo y Ministerio Público.

10°.- Que en relación a las comunicaciones remitidas entre la FN (incluyendo las correspondientes al Fiscal Nacional, abogados asistentes, abogados asesores, directores de Unidades Especializadas) y la FRV, (incluyendo las correspondientes al Fiscal Regional, fiscales adjuntos, abogados asistentes,



abogados asesores y abogados de unidades especializadas), hay que tener presente que los correos electrónicos de fiscales y funcionarios del Ministerio Público no constituyen información pública, pues se trata de una herramienta comunicacional de trabajo interno entre el personal de la FN y las FR, para el desarrollo de sus labores institucionales, cuyas comunicaciones a través de este medio, se encuentran protegidas por la garantía constitucional del artículo 19 N° 5 de nuestra Carta Fundamental, que establece la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada.

11°.- Que respecto del alcance de esta garantía, el Tribunal Constitucional ha señalado que se entiende por comunicaciones privadas aquellas en que el emite singulariza al o a los destinatarios de su comunicación con el evidente propósito de que sólo él o ellos la reciban. Como, asimismo, aquella forma de comunicación que dirige el emisor al receptor con el propósito que únicamente él la reciba y ambos sepan su contenido; por tanto se prohíbe a otras personas imponerse de éste. El derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones no se extiende a los propios sujetos que intervienen en ellas. La impenetrabilidad, el secreto, la opacidad, es respecto de terceros ajenos a la misma, de aquellos que no son ni emisores ni receptores. (Rol 2153-11 TC).

12°.- Que, en igual condición, se encuentran los informes emanados de la Unidad de Asesoría Jurídica de la FRV durante el período que media entre los años 2015 y 2019, relativos al recurrente, así como todos los informes emanados de las Unidades de Asesoría Jurídica y Unidades Especializadas de la FN. En efecto, su reserva se haya amparada por en los artículos 8 inciso cuarto de la Ley N° 19.640 y 21 N° 1 letra a) de la Ley N° 20.285, ambos transcritos en el fundamento octavo de este fallo, pues su divulgación permitiría que terceros conocieran los criterios de persecución del MP, afectando la estrategia del ente persecutor en actuales y futuras investigaciones.

Por lo demás, tal criterio ha sido consolidado mediante instrucciones impartidas por el Fiscal Nacional, (Oficio FN N° 060/2014, de fecha 23 de enero de 2014), en el cual dispone, a propósito del registro de la investigación, que: *“Los fiscales evitarán y, por lo mismo, no están obligados a dar copia a los intervinientes, de aquella documentación consistente en comunicaciones entre el fiscal y sus superiores jerárquicos, pares o personal colaborador, así como todo antecedente de carácter epistolar que dé cuenta de actuaciones, opiniones o instrucciones de carácter administrativo. En tal sentido, se instruye específicamente no incluir copia de tales comunicaciones y, sobre todo, de los*



informes jurídicos provenientes de las Unidades Especializadas o Unidades de Asesoría Jurídica (regionales o Nacional) en las respectivas carpetas de investigación.”.

13°.- Que de acuerdo a lo razonado, el MP ha actuado con apego a la Constitución Política de la República y a la ley en el ejercicio de sus funciones, al comunicar al recurrente, mediante Carta DEN/LT N° 1184/2020 de fecha 31 de diciembre de 2020, suscrita por Francisca Werth Wainer, Directora Ejecutiva Nacional del MP, que no entregaría la información referida en los motivos 9°, 10° y 12° de este fallo.

Por tales razonamientos y normas legales citadas, se **RECHAZA** el reclamo de ilegalidad deducido por los abogados Ciro Colombara López, Aldo Díaz Canales y Carlos Mora Jano, en representación de Fulvio Rossi Ciocca, en contra del Ministerio Público, representado por el Consejo de Defensa del Estado, por haber dictado la Carta DEN/LT N° 1184/2020 de fecha 31 de diciembre de 2020, suscrita por doña Francisca Werth Wainer, Directora Ejecutiva Nacional del MP, con costas.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del Ministro Sr. Carreño.

Rol 43-2021.-



Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Mario Rojas G., Fernando Ignacio Carreño O., Maritza Elena Villadangos F. Santiago, seis de julio de dos mil veintiuno.

En Santiago, a seis de julio de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 04 de abril de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>